



# ORDINES

*Per un sapere interdisciplinare sulle istituzioni europee*

ISSN 2421-0730

NUMERO 1 – GIUGNO 2017

FRANCISCO JAVIER ANSUÁTEGUI ROIG

## **El sentido moral del imperio de la ley: tesis y consecuencias**

**ABSTRACT-** In these short observations I will discuss some basic ideas of Francisco Laporta about the notion of “law’s empire”. I think that it is possible to draw some consequences on fundamental thesis about legal thinking, especially about the distinction between law and morality. I would like to underline the centrality of the themes on which Laporta worked in the general background of legal issues

**KEYWORDS** – Law’s empire, Law, Morality

FRANCISCO JAVIER ANSUÁTEGUI ROIG\*

## **El sentido moral del imperio de la ley: tesis y consecuencias\*\***

SOMMARIO: 1. *La relevancia de la cuestión del imperio de la ley para la Filosofía del Derecho*; 2. *Distintas interpretaciones del legalismo*; 3. *Imperio de la ley y autonomía. Una fundamentación ética*; 4. *El imperio de la ley y la separación entre el Derecho y la moral*.

### *1. La relevancia de la cuestión del imperio de la ley para la Filosofía del Derecho*

La atención a la idea de imperio de la ley constituye uno de los elementos recurrentes en el itinerario intelectual de Francisco Laporta. Seguramente, la expresión más importante de esta preocupación está constituida por el libro *El imperio de la ley. Una visión actual*<sup>1</sup> en donde se retoman argumentos desarrollados en trabajos anteriores<sup>2</sup>.

Cada cual tiene sus preferencias a la hora de identificar temas en los que centrar la atención investigadora en el amplio marco de la

---

\* Professore Ordinario di Filosofia del diritto presso l'Università Carlos III di Madrid.

\*\* Contributo sottoposto a valutazione anonima.

<sup>1</sup> F. J. LAPORTA, *El imperio de la ley. Una visión actual*, Trotta, Madrid 2007.

<sup>2</sup> F. J. LAPORTA, *Imperio de la ley. Reflexiones sobre un punto de partida de Elías Díaz*, in *Doxa* I/1994, 15-16; ID., *Imperio de la ley y seguridad jurídica*, in E. DIAZ, J.L. COLOMER (a cura di), *Estado, justicia, derechos*, Alianza, Madrid 2002.

Filosofía del Derecho. Así, podemos considerar que ciertas cuestiones son más periféricas que otras, que ocupan por el contrario un lugar central. Más allá de las “modas” que en determinados momentos y contextos pueden centrar la atención del gremio de los filósofos del Derecho, creo que hay cuestiones, nucleares y centrales, que ocupan un lugar fundamental en nuestra materia (o, al menos, en una determinada forma de entenderla). No hace demasiado tiempo me he referido a la centralidad de la relación entre la razón y la voluntad, expresión de dos dimensiones del Derecho que aparecen constantemente, con perfiles en ocasiones novedosos, en los problemas principales que nos planteamos en nuestro ámbito<sup>3</sup>. Pero si tuviéramos que identificar dos cuestiones que derivan directamente de la relación/tensión entre razón y voluntad, creo que estas serían las que tienen que ver, por una parte, con la relación entre el Derecho y el Poder, y con la relación entre el Derecho y la moral, por otra. Estamos frente a dos ámbitos que centran la atención de aquel que se aproxima al Derecho en perspectiva filosófica desde hace veinticinco siglos y que condicionan directamente nuestra forma de conceptualizar y justificar el Derecho. Pues bien, la reflexión sobre el imperio de la ley implica plantearse el tema del control del Poder por parte del Derecho, de un lado; e invita a asumir una posición respecto a la relación entre el Derecho y la moral, de otro. De ser esto así, hay que reconocer que quien se ocupa durante su carrera académica del tema –este es el caso de Francisco

---

<sup>3</sup> F. J. ANSUÁTEGUI ROIG, *Razón y voluntad en el Estado de Derecho. Un enfoque filosófico-jurídico*, Dykinson, Madrid 2013; L. FERRAJOLI, *La logica del diritto. Dieci aporie nell'opera di Hans Kelsen*, Laterza, Roma-Bari 2016, 236.

Laporta- no ha centrado su atención precisamente en cuestiones que se pudieran considerar periféricas o parroquiales.

## *2.- Distintas interpretaciones del legalismo*

En realidad, la noción de imperio de la ley puede ser entendida de diferentes maneras. En este momento propongo que pensemos en dos: un concepto estricto o restringido y un concepto amplio o extenso. Cuando se habla de imperio de la ley en sentido estricto, se está haciendo referencia a la reivindicación del valor y de la posición de una norma específica –la ley- que ocupa una posición determinada en el sistema de fuentes, y que es expresión de la voluntad política del legislador. Frente a esto, el imperio de la ley en sentido amplio ya no se refiere a la posición de un específico tipo de norma en el Ordenamiento y sus consecuencias; por el contrario supone una reivindicación del valor del Derecho, como modelo de organización de las conductas que recurre a las reglas como estrategia normativa. Por cierto, asumir alguna de estas dos posibilidades –la estricta o la amplia- no es en absoluto intrascendente a la hora de interpretar la relación –en términos de semejanzas o diferencias- entre el Estado de Derecho y el Estado constitucional. Como es bien sabido, frente al “cambio genético” al que se refiere Gustavo Zagrebelsky para caracterizar la superación del Estado (legislativo) de Derecho por parte del Estado constitucional<sup>4</sup>, es posible defender que éste es un modelo evolucionado y complejo de aquel (precisamente como consecuencia de estrategias limitativas

---

<sup>4</sup> G. ZAGREBELSKY, *Il diritto mite. Legge, diritti, giustizia*, Einaudi, Torino 1992, 39.

del Poder a partir de la supremacía y rigidez constitucional), en el que se mantiene la idea principal, el imperio del Derecho, que ahora se presenta en forma de imperio de la Constitución.

En mi opinión Francisco Laporta asume un planteamiento respecto al sentido del imperio de la ley más cercano al concepto estricto, lo que le lleva a presentarse como un “legalista”, aunque creo que posiblemente no en términos de perfecta identificación<sup>5</sup>. Posiblemente, en tiempos de constitucionalismo como los que corren, dicha caracterización puede presentarse como problemática para algunos. Pero de lo que se trata es de entender qué se quiere decir cuando se hace referencia al legalismo. Me parece que es posible reconocer el carácter problemático de un legalismo que nos propone abandonar la “explicable obsesión por la Constitución”<sup>6</sup>; o, en otros términos, la excesiva “condescendencia” de algunos autores respecto a “ciertos ingredientes que se estiman novedosos de los órdenes jurídicos presididos por una Constitución”<sup>7</sup>. Condescendencia y obsesión entendidos como rasgos que parecerían caracterizar el ambiente jurídico de nuestros días en nuestro contexto doctrinal. Y digo que es problemático, si ello supone desconocer las consecuencias e implicaciones – no sólo jurídicas sino también políticas- que para la teoría de la producción normativa, la teoría de la norma, de la interpretación y aplicación del Derecho, por ejemplo, derivan de la naturaleza constitucional de nuestros sistemas jurídicos. Pero si ser legalista supone, por el contrario, reivindicar la

---

<sup>5</sup> F. J. LAPORTA, *El imperio de la ley. Una visión actual*, cit., 14.

<sup>6</sup> *Ibidem*.

<sup>7</sup> F. J. LAPORTA, *Imperio de la ley y constitucionalismo. Un diálogo entre Manuel Atienza y Francisco Laporta*, in *El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho*, Iustel, núm. 0/2008, 148.

centralidad –que no supremacía o superioridad- de la norma producida por el legislador, su legitimidad, su potencialidad como elemento regulador de las conductas humanas, con una capacidad de responder a demandas de carácter ético en una superación de un discurso estrictamente formalista<sup>8</sup>, creo que las cosas son diferentes; en definitiva, la reivindicación del valor de la norma como estrategia de regulación del comportamiento frente a otras posibilidades (por desgracia no menos eficaces en algunas ocasiones). Si de lo que se trata cuando se habla de legalismo es atribuir valor a esta forma de entender el Derecho –posiblemente no radicalmente contradictoria con la anterior- entonces, ciertamente puede haber buenas razones para presentarse como legalista.

### 3.- *Imperio de la ley y autonomía. Una fundamentación ética*

Francisco Laporta considera que la idea de imperio de la ley está basada en una determinada teoría de la autonomía personal. Esta teoría constituye el fundamento moral del imperio de la ley y está constituida por cuatro componentes: la libertad negativa para llevar a cabo acciones, el control racional de la satisfacción de preferencias de acuerdo con su jerarquía estratificada, la proyección de las decisiones reflexivas en el tiempo y la conformación de planes de vida generales y abstractos interrelacionados<sup>9</sup>.

La idea de autonomía personal supone el reconocimiento del sujeto como protagonista a la hora de planificar y proyectar sus acciones y su trayectoria, e implica capacidad de autogobierno, entendida como un ideal regulativo, “en el sentido de que toda nuestra comprensión de la cultura descansa en la presuposición de que es deseable que los

---

<sup>8</sup> F. J. LAPORTA, *El imperio de la ley. Una visión actual*, cit., 167.

<sup>9</sup> F. J. LAPORTA, *El imperio de la ley. Una visión actual*, cit., 17-37.

seres humanos se definan a sí mismos a través de su propia capacidad de decisión”<sup>10</sup>. Somos “criaturas planificadoras”<sup>11</sup>. Parece claro que esta dimensión planificadora se puede ver dificultada como consecuencia del carácter social del individuo: el individuo se encuentra incluido en una sociedad en la que hay un gobierno que produce normas que se imponen coactivamente: “Cuando estoy sujeto a normas que se me imponen si es necesario mediante una apelación a la fuerza, es decir, cuando soy el sujeto obligado por normas jurídicas, entonces, y en la medida en que lo soy, *no soy* un agente moral autónomo, porque ser un agente con esas características parece excluir, por definición, la acción del poder político sobre mi conducta”<sup>12</sup>. Si el principio de autonomía es una exigencia moral, la inclusión en una sociedad parece también algo inevitable. Estamos frente a una tensión entre algo exigido y algo inevitable, a la que se ha referido Ernesto Garzón Valdés: “el gran desafío teórico con el que se encuentra la teoría moral y política del liberalismo es cómo armonizar su suposición básica según la cual los individuos, en tanto seres autónomos, procuran formular sus planes de vida privilegiando la realización de sus propios intereses, con el establecimiento necesario de un orden social heterónomo que preserve esta autonomía”<sup>13</sup>.

Esta tensión entre lo exigido y lo inevitable se pretende gestionar a través de la articulación del poder político y del Derecho de un modo prudencial, de forma que, constatada la existencia de conflictos de

---

<sup>10</sup> F. J. LAPORTA, *El imperio de la ley. Una visión actual*, cit., 37.

<sup>11</sup> F. J. LAPORTA, *El imperio de la ley. Una visión actual*, cit., 32.

<sup>12</sup> F. J. LAPORTA, *Imperio de la ley. Reflexiones sobre un punto de partida de Elías Díaz*, cit., 137.

<sup>13</sup> E. Garzon Valdes, *Hipocresía, simpatía y Estado de Derecho*, in *Claves de razón práctica*, n. 101/2000, 10.

intereses en el grupo humano, se hace necesaria la institución de una autoridad que pueda actuar disuasoriamente y que pueda ejercer la coacción y el monopolio en el uso legítimo de la fuerza. El problema es que de la existencia de esa autoridad, que puede llegar a ser ilimitada, también se pueden derivar peligros para la autonomía personal: “La suerte de los propósitos y proyectos de los seres humanos bajo un poder ilimitado de estas características no sería, desde luego, muy envidiable y la dignidad del hombre entendida como autonomía individual estaría supeditada nuevamente a los excesos de un mecanismo tan veleidoso, insaciable e impredecible como el que más”<sup>14</sup>. Para evitar estos peligros existen tres ideales básicos, de carácter moral: el imperio de la ley, los derechos del hombre y el principio democrático<sup>15</sup>.

---

<sup>14</sup> F. J. LAPORTA, *Imperio de la ley. Reflexiones sobre un punto de partida de Elías Díaz*, cit., 137.

<sup>15</sup> En 1993 Laporta se refiere a tres estrategias teóricas que se utilizan para justificar y legitimar las normas de un sistema jurídico: la apelación a la paz, la seguridad, la certeza; la apelación a la democracia y al principio de las mayorías; y la apelación a ciertos derechos básicos de los individuos, anteriores a las normas jurídicas (F. J. LAPORTA, *Entre el Derecho y la Moral*, Fontamara, México 1993, 73-84). Merece subrayarse que por aquel entonces acentuaba la dimensión instrumental de aspectos que posteriormente vincularía de manera más estrecha al imperio de la ley: “La organización, la coordinación de conductas o la dimensión pública de un cierto estado de cosas no constituyen de por sí situaciones éticamente valiosas (...). Ello quiere decir, una vez más, que el sistema jurídico no se legitima necesariamente por su capacidad organizatoria o coordinadora, sino que, en todo caso, se legitimaría como algo dotado de un valor instrumental respecto de otro u otros valores o bienes ulteriores a los que se pudiera llegar por medio de la organización, es decir, que el sistema jurídico en cuanto que jurídico no sería en sí legítimo, aunque lo podría ser como medio para la consecución de un estado de cosas éticamente justificado”.



Pues bien, de lo que se trata es de ver de qué manera explica Laporta la relación que existe entre imperio de la ley y autonomía personal, sentando por tanto las bases de la afirmación según la cual el imperio de la ley constituye un universo ético, es decir “no es una “propiedad” del Derecho, algo inherente a la mera existencia empírica del orden jurídico, algo que nace ya con la mera norma jurídica, sino que es un postulado metajurídico, una exigencia ético-política o un complejo principio moral que está más allá del puro derecho positivo; o dicho en términos familiares, que no se refiere al derecho que «es», sino al derecho que «debe ser»”<sup>16</sup>.

Para comprender la vida cotidiana y las decisiones que los individuos toman de manera ordinaria es necesario tener en cuenta el condicionamiento derivado de la existencia de normas jurídicas. El Derecho puede facilitar esas decisiones o, por el contrario dificultarlas. Laporta asume la distinción - apoyada en la diferenciación entre tipos de racionalidad desarrollada por Elster- entre dos contextos en los cuales se pueden adoptar decisiones: el contexto paramétrico y el contexto estratégico. El primero se caracteriza por su estabilidad, constancia y fijeza, mientras que en el segundo, los componentes que lo configuran están sometidos a variaciones. El grado de predecibilidad o previsibilidad es mayor en un contexto paramétrico que en uno estratégico. Lo cierto es que el Derecho tiene mucho que decir a la hora de la configuración de los contextos de decisión como paramétricos o estratégicos. La satisfacción de las exigencias del imperio de la ley permite que el Derecho constituya contextos paramétricos de decisión, ya que crea condiciones de estabilidad que le permiten al individuo adoptar decisiones en un marco de certidumbre, previsibilidad y

---

<sup>16</sup> F. J. LAPORTA, *Imperio de la ley. Reflexiones sobre un punto de partida de Elías Díaz*, cit., 135.

predecibilidad. No se tienen en cuenta sólo los elementos del contexto, sino también las consecuencias de sus decisiones y acciones. Desde el momento en que los contextos de decisión dejan de ser estratégicos para convertirse en paramétricos, podemos generar expectativas basadas en la probabilidad y en la regularidad<sup>17</sup>. Para que la constitución de dichos contextos paramétricos pueda tener lugar a través del imperio de la ley, el Derecho debe constituirse de una determinada manera; estamos ante los requisitos del imperio de la ley, que son identificados por Laporta de la siguiente manera: 1) el Derecho debe estar constituido por un conjunto de normas, entendidas como reglas, ya que sólo así se pueden crear condiciones de regularidad en el marco de la cuales los individuos puedan adoptar decisiones en contextos paramétricos; 2) las normas jurídicas deben tener una determinada estructura: deben ser emitidas por una autoridad reconocida y ser generales, prospectivas, estables, claras y ciertas; 3) desde el punto de vista dinámico, el referido a la interpretación y aplicación del Derecho, el imperio de la ley exige determinados requisitos institucionales, condiciones de imparcialidad, teniendo en cuenta determinadas exigencias argumentativas. El principal requisito institucional es el de la separación de poderes, a través de la cual se garantiza la existencia de una institución independiente a la que puede acudir el individuo cuando se producen casos de violación del Derecho o problemas en la interpretación del mismo, de manera que se pueda asegurar la autonomía individual desde el momento en que se sabe que nadie va a poder “establecer limitaciones, atribuir responsabilidades ni acordar sanciones que no estuvieran previstas de antemano por la

---

<sup>17</sup> F. J. LAPORTA, *El imperio de la ley. Una visión actual*, cit., 49.

norma”<sup>18</sup>. Además, las condiciones de imparcialidad se identifican con los denominados “principios de justicia natural”, tendentes a asegurar la imparcialidad del juez en el proceso y la igualdad de las partes en el mismo. Las exigencias de argumentación tienen que ver con la primacía del razonamiento deductivo, que toma como premisa básica a las normas jurídicas, entendidas como reglas generales y ciertas, y que excluye preferencias personales y premisas fácticas apoyadas en hechos no probados.

Frente a una concepción instrumental del imperio de la ley como la de Joseph Raz (según el cual el imperio de la ley es un requisito para que el Derecho cumpla sus fines: guiar las conductas, para lo cual debe estar configurado de manera que pueda efectivamente guiar esas conductas, sin que ello implique la calificación moral de esos fines)<sup>19</sup> Laporta, por su parte, no presta atención a esta concepción instrumental, aunque reconoce que la satisfacción de las exigencias del imperio de la ley es compatible con grandes dosis de injusticia<sup>20</sup>. Su interés radica en la idea según la cual el imperio de la ley constituye un universo ético desde el momento que es un instrumento de garantía de la autonomía y de la dignidad humanas. La garantía de la dignidad es una consecuencia derivada del imperio de la ley: el Derecho debe configurarse de acuerdo con las exigencias del imperio de la ley porque ello parece imprescindible para poder lograr su objetivo que es la guía de las conductas; y como consecuencia de ello y dado el carácter de esos principios, se

---

<sup>18</sup> F. J. LAPORTA, *Imperio de la ley. Reflexiones sobre un punto de partida de Elías Díaz*, cit., 143.

<sup>19</sup> J. RAZ, *El Estado de Derecho y su virtud*, in ID., *La autoridad del Derecho. Ensayos sobre Derecho y moral*, trad. y notas de R. Tamayo Salmorán, UNAM, México 1982.

<sup>20</sup> F. J. LAPORTA, *Imperio de la ley y seguridad jurídica*, cit., 127.

garantiza la dignidad. De lo contrario se podría estar afirmando que la finalidad directa del Derecho es garantizar la dignidad. Desde un punto de vista normativo puede ser así, pero no desde un punto de vista descriptivo. Laporta parte de la base de que el Derecho debe garantizar la dignidad y la autonomía; pero para ello es necesario que esté configurado de determinada manera.

*4.- El imperio de la ley y la separación entre el Derecho y la moral*

La teoría del imperio de la ley presentada por Francisco Laporta tiene claras connotaciones que afectan de manera directa al problema de la relación entre Derecho y Moral y más en concreto a la tesis de la separación. Y por tanto, de ella se pueden derivar consecuencias respecto a la adscripción iusnaturalista o positivista de sus postulados.

Me parece que la cuestión puede ser planteada en los siguientes términos. Por una parte, se afirma que los requisitos del imperio de la ley, y la misma idea de imperio de la ley, son una condición necesaria de la juridicidad. Así, se ha mantenido la tesis según la cual un determinado grado de cumplimiento de las exigencias del imperio de la ley es imprescindible no para la justicia del Derecho, sino para su misma existencia. El imperio de la ley es el imperio de las reglas y es aquí donde se constata el carácter antonómico que existe entre el concepto de Derecho y la idea de arbitrariedad. Por otra, se presenta una lectura moral del imperio de la ley, que es presentado como algo que merece valoración positiva a partir, entre otras cosas, de su status de condición necesaria de la satisfacción de las exigencias de la autonomía personal. En definitiva, si se afirma el sentido moral del imperio de la ley, y al mismo tiempo su relación necesaria con el

concepto de Derecho, surge la pregunta sobre el tipo de relación entre el Derecho y la moral que se está defendiendo. Si el imperio de la ley tiene un valor moral y si su existencia es imprescindible en el Derecho, desde el momento en que se distingue de la arbitrariedad, entonces parece que el Derecho tiene un rasgo necesario que ver con su valor moral, con lo cual estaríamos frente a la afirmación de la relación necesaria entre el Derecho y la moral.

Creo que en este punto es posible efectuar algunas observaciones: una referida a la interpretación de la tesis de la separación y otra referida a la distinción entre diversas acepciones del iusnaturalismo.

Por una parte, merece la pena intentar una adecuada interpretación de la tesis de la separación conceptual que es aquella que afirma la no necesaria conexión conceptual entre el Derecho y la moral *considerada correcta*. Robert Alexy ha diferenciado dos versiones de la tesis de la conexión necesaria entre el Derecho y la moral<sup>21</sup>. Una versión *débil*, señala que existe una relación necesaria entre el Derecho y *alguna* moral. Otra versión *fuerte* afirma la relación necesaria entre el Derecho y la moral *correcta*. Alexy denomina a la versión débil, la ‘tesis moral’. No parece que la tesis débil suponga la negación de la tesis de la separación conceptual entre el Derecho y la moral, siempre y cuando estemos hablando de moral correcta. De la misma manera, no creo que, al contrario de lo que afirma Alexy, la tesis débil sirva para demostrar la conexión necesaria entre el Derecho y la moral, por lo menos en el sentido que a dicha propuesta ha querido darle el iusnaturalismo –frente a la cual han reaccionado autores como Hart- y que ha estado vinculada a la afirmación de la necesaria evaluación moral positiva que merece el Ordenamiento a

---

<sup>21</sup> R. ALEXY, *El concepto y la validez del Derecho*, trad. de J. M. Seña, Gedisa, Barcelona 1994, 79.

partir de su concurrencia con la moral, identificada con el Derecho natural. En definitiva, no parece existir contradicción entre la afirmación de la conexión entre el Derecho y la moral y la tesis débil, tal y como es presentada por Robert Alexy. Afirmer que en un Ordenamiento siempre vamos a encontrar planteamientos morales no implica afirmar: 1) que esos planteamientos morales deben ser necesariamente unos concretos y no otros; y 2) que esos planteamientos morales son correctos desde el punto de vista de una moral crítica o esclarecida. Aquí se observa claramente que la existencia de dimensiones morales en el Derecho no implica necesariamente corrección moral.

Por otra parte, puede ser útil hacer referencia a la distinción entre iusnaturalismo en sentido débil e iusnaturalismo en sentido fuerte, que no es sino una manifestación de la distinción entre iusnaturalismo deontológico e iusnaturalismo ontológico<sup>22</sup>. El iusnaturalismo en sentido débil establece una conexión necesaria entre el Derecho y la moral. Pero no porque el Derecho, en su misma existencia, sea un valor moral, sino porque es un medio para alcanzar fines que merecen una valoración moral positiva. El Derecho está conectado con la moral desde el momento en que permite crear condiciones de paz, seguridad, certeza. Son estos objetivos los que tienen un carácter moral que, a través de la relación medio-fin que se establece con el Derecho, repercutiría en éste. A diferencia de lo que ocurre con el iusnaturalismo en sentido débil, el iusnaturalismo en sentido fuerte predica directamente el valor moral del Derecho, en cuanto vinculado por el Derecho natural, sin depender de su carácter instrumental respecto a ciertos fines, objetivos o consecuencias.

---

<sup>22</sup> A. PASSERIN D'ENTREVES, *La dottrina del diritto naturale*, Edizioni di Comunità, Milano 1962, 161 ss.

Las exigencias del imperio de la ley tienen carácter moral en la perspectiva del iusnaturalismo en sentido débil. Es decir, tienen un valor moral apreciable desde el momento en que aparecen como requisitos necesarios, o simplemente medios, para alcanzar objetivos de los que sí se predica una evaluación moral positiva. Pero a partir de ese momento, un Derecho que cumpla con las exigencias del imperio de la ley puede tener unos contenidos que merezcan una evaluación moral negativa. Así, nada parece excluir la posibilidad de que un sistema jurídico cree condiciones de seguridad y certeza en el marco de los cuales un grupo étnico, por ejemplo, va a ser discriminado e incluso masacrado. Sus miembros disponen, con el suficiente grado de estabilidad, previsibilidad, claridad, certeza, de la información sobre las consecuencias de sus actos o de su pertenencia al grupo. ¿Cómo se puede calificar la anterior situación a partir de la propuesta de comprensión del Derecho presentada por el iusnaturalismo en sentido débil?. Parece que estaríamos obligados a emitir dos juicios morales. El primero estaría referido a la estructura del Ordenamiento, mientras que el segundo lo estaría al contenido del mismo, es decir, a lo que ordena, prohíbe o permite. En el caso del ejemplo anterior, estaríamos ante un sistema jurídico que satisface los criterios establecidos por Fuller a la hora de identificar la moral interna del Derecho <sup>23</sup>. Desde ese punto de vista, qué duda cabe de que el juicio moral sería *prima facie* positivo, desde el momento en que el Derecho desarrolla una función de información, permite saber<sup>24</sup>. Pero ese juicio moral positivo no sería posible en el

---

<sup>23</sup> A. PORCIELLO, *Principi dell'ordine sociale e libertà individuale. Saggio sulla Jurisprudence di Lon L. Fuller*, Edizioni ETS, Pisa 2016.

<sup>24</sup> P. CALAMANDREI, *Sin legalidad no hay libertad*, trad. y pról. de P. Andrés Ibáñez. Trotta, Madrid 2016, 33.

caso de que examináramos los contenidos normativos de las anteriores estructuras.

De acuerdo con lo anterior, se podría llegar a la conclusión de que un Ordenamiento jurídico que satisfaga las exigencias del imperio de la ley puede ser, al mismo tiempo, un Ordenamiento jurídico que podría ser considerado injusto o inmoral. Lo anterior permitiría concluir que entre un iusnaturalismo en sentido débil y un positivismo que afirme la no necesaria relación entre el Derecho y la moral correcta existen diferencias que tienden a difuminarse. Posiblemente esta circunstancia puede ser un indicio de que, realmente, en la Filosofía del Derecho las etiquetas no son tan importantes como las tesis que se esconden tras las mismas. No creo que Francisco Laporta tenga reparos frente a esta afirmación.